

Fecha: 09/05/2025

Transformaciones de la violencia en el departamento de Nariño: impacto de los Acuerdos de Paz (2016-2025)

J. A. Cerón, Programa de Ciencia política, Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, Universidad del Cauca, juliance@unicauca.edu.co

Resumen

Este artículo analiza la transformación de la violencia en el departamento de Nariño en Colombia, a partir de la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 hasta 2025. A través de un enfoque cualitativo y una revisión documental, se examinan los cambios en indicadores de homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y acciones armadas. La investigación se centra en la reconfiguración de actores armados y la persistencia de economías ilícitas, lo que ha influido significativamente en la dinámica de la violencia en la región. Respecto a los datos, se procede utilizando informes gubernamentales, investigaciones académicas y documentos de organizaciones no gubernamentales. Este artículo proporciona una visión integral del impacto del Acuerdo de Paz en la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. Los hallazgos sugieren que, aunque ha habido avances, los desafíos persisten, destacando la necesidad de políticas efectivas para abordar las causas subyacentes de la violencia.

Lista de Abreviaturas

1. ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
2. ARN - Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
3. CODHES - Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
4. COVID-19 - Coronavirus Disease 2019
5. DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística
6. ELN - Ejército de Liberación Nacional
7. ETCR - Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación
8. FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

9. INDEPAZ - Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
10. INMLCF - Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
11. LGTBIQ+ - Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Queer (más otras identidades)
12. NNA - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
13. ONU - Organización de las Naciones Unidas
14. ODS - Objetivos de Desarrollo Sostenible
15. PDET - Proyecto de Desarrollo con Enfoque Territorial
16. PIP - Plan Integral de Prevención y Protección
17. RUV - Registro Único de Víctimas
18. SIMCI - Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos
19. SAT - Sistema de Alerta Temprana
20. UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
21. UARIV - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Introducción

El conflicto armado en Colombia, que comenzó en la década de 1960, ha involucrado a guerrillas como las FARC y ELN, paramilitares y narcotraficantes, dejando secuelas como violaciones de derechos humanos, desplazamientos y fragmentación social (Calderón, 2016). Nariño, debido a su ubicación estratégica para el narcotráfico y su cercanía con Ecuador, ha sido gravemente afectada, albergando economías ilícitas como el cultivo de coca y el tráfico de drogas. Dichas economías que financian a grupos armados ilegales y aumentan la vulnerabilidad de las comunidades locales, que enfrentan desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y violencia. Tras los Acuerdos de Paz, la persistencia de estas economías ha dificultado la consolidación de la paz, ya que los territorios antes controlados por las FARC ahora son disputados por otros actores ilegales. Además, las economías ilícitas fomentan la corrupción, la violencia y la cooptación de autoridades locales (Ávila, 2019).

El Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016, buscaba la desmovilización de las FARC, la transformación rural y la reparación de víctimas. Sin embargo, su

implementación ha enfrentado dificultades, especialmente en Nariño, donde grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las FARC y narcotraficantes, aún controlan territorios. A pesar de los esfuerzos por promover la reconciliación, la violencia en Nariño ha aumentado entre 2018 y 2023, con altos índices de homicidios y desplazamiento forzado. En 2020, Nariño registró el mayor número de desplazamientos forzados en Colombia, lo que cuestiona la efectividad del acuerdo en garantizar seguridad en zonas vulnerables.

Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana en la evolución de la violencia en Nariño entre 2016 y 2025. A través de un análisis detallado de indicadores clave como homicidios, desplazamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) y acciones armadas, se evaluarán tanto los avances como los desafíos persistentes en el proceso de consolidación de la paz en esta región. En este sentido, la hipótesis central sostiene que los Acuerdos de Paz tuvieron un impacto parcial y desigual en la reducción de la violencia, influenciado por la reconfiguración de los actores armados y las economías ilícitas. También se analizará la influencia de los acuerdos en la desmovilización de actores armados en Nariño, considerando la continuidad del conflicto. De esta manera, la investigación se divide en tres partes: primero, se establece el contexto histórico del conflicto previo a la implementación de los acuerdos; segundo, se describe el contexto de implementación y se analiza la evolución de la violencia; y finalmente, se discuten los hallazgos, evaluando si las dinámicas de desmovilización y los efectos de los acuerdos cumplieron con las expectativas y metas planteadas para reducir la violencia en la región.

El análisis de la violencia en Colombia en el contexto de los Acuerdos de Paz de La Habana destaca tres ejes principales: la implementación de los acuerdos, la reconfiguración de los actores armados y la persistencia de las economías ilícitas. Aunque los acuerdos firmados en 2016 inicialmente redujeron la violencia en algunas regiones, en Nariño la disminución fue temporal. Investigadores como González (2019) han señalado que la debilidad del Estado y la falta de presencia institucional dificultaron la consolidación de la paz. Mientras tanto, según Vargas (2020) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2021), la violencia persiste debido a las disidencias de las FARC, bandas criminales y

nuevos actores del narcotráfico, que disputan el control de rutas y cultivos de coca. Ávila (2019) también resalta que, aunque los enfrentamientos con las FARC disminuyeron, la reorganización de grupos armados ha mantenido altos niveles de conflicto en la región.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder ha sido ocupado por disidencias, el ELN y grupos criminales, lo que ha incrementado la violencia en Nariño. Ávila (2020) y otros analistas coinciden en que esta recomposición del conflicto está vinculada a la disputa por territorios estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales. La fragmentación de los grupos armados ha generado un ciclo de violencia, especialmente en áreas rurales. Las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, han fortalecido a los grupos ilegales, permitiéndoles expandir su control territorial. Con respecto a esto, señala Ávila (2021) que, a pesar de los esfuerzos por erradicar los cultivos ilícitos, la persistencia del mercado de la coca ha mantenido altos niveles de violencia. Estas economías han generado dependencia económica en las comunidades locales, dificultando la creación de alternativas legales. La violencia se presenta como un fenómeno multifacético, incluyendo violencia directa, estructural y simbólica, que refleja tanto enfrentamientos físicos como desigualdades sociales y débil institucionalidad en la región.

Según ACNUR (2021) el desplazamiento forzado sigue siendo un grave problema, con más de 22.000 personas desplazadas en 2020. Además, el reclutamiento de menores por parte de grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC ha aumentado, con 142 casos documentados en 2019, lo que convierte a Nariño en el departamento más afectado por esta práctica (Human Rights Watch, 2020). Mientras que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2022) reporta que la tasa de homicidios en Nariño ha mostrado variaciones significativas, alcanzando un pico alarmante en 2020 con 48,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional, lo que refleja la persistente inseguridad en la región. Considerando esto, este estudio tiene como objetivo llenar los vacíos existentes al analizar de manera detallada y comparativa la evolución de los indicadores de homicidios, desplazamientos, reclutamiento de NNA y acciones armadas en Nariño entre 2010 y 2025. Al comparar los años previos y posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, se espera ofrecer una visión crítica sobre los avances y desafíos en la consolidación de la paz en la región.

Metodología

Enfoque de Investigación

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo, empleando una revisión documental como estrategia principal de recolección de información. El objetivo es analizar la evolución de indicadores de violencia (homicidios, desplazamiento, reclutamiento de menores y acciones armadas) en el departamento de Nariño antes y después de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana. Además de identificar patrones en la evolución de los indicadores de violencia, se examinan posibles relaciones de causa-efecto entre los procesos de paz y los cambios observados en las áreas más afectadas por el conflicto.

Selección de Fuentes

A continuación, se describen las fuentes de información utilizadas para sustentar el presente estudio:

- **Informes gubernamentales:** se consideraron documentos oficiales emitidos por el Gobierno de Colombia, la Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales que aborden tanto la implementación de los Acuerdos de Paz como sus efectos en los niveles de violencia en Nariño.
- **Investigación académica:** se recopilaron estudios y artículos publicados en revistas académicas, con un enfoque en aquellos que aborden la violencia política y los procesos de paz en Colombia. Solo se incluyeron investigaciones recientes, principalmente de los últimos 5 a 10 años, para asegurar la actualidad y relevancia de los datos.
- **Organizaciones no gubernamentales (ONG):** informes de ONGs de prestigio internacional, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que monitorean la situación de derechos humanos en Nariño. Estas fuentes ofrecen análisis independientes y datos actualizados que aportan una perspectiva externa sobre el impacto de los Acuerdos de Paz en la violencia local.

Recolección de información

La recolección de información se llevó a cabo mediante una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas, bibliotecas especializadas y sitios web de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Se establecieron criterios de rigor académico y actualidad, excluyendo aquellas fuentes que carecían de calidad metodológica o que no abordaban el contexto específico de Nariño. Por lo tanto, la técnica de recolección de información fue la revisión documental que, en este caso, se basó en la examinación y análisis de documentos para contextualizar el conflicto en Nariño. Dicha técnica también incluyó la fundamentación teórica para entender conceptos clave sobre violencia, narcotráfico, reclutamiento forzado, entre otros. Así pues, el uso de esta técnica permitió la recopilación de antecedentes, la formulación conceptual, la identificación de actores y dinámicas, además de el contraste y triangulación de las fuentes.

Análisis de los datos

Se realiza un análisis temático, el cual consiste en identificar los temas clave y reconocer patrones que emergen como relevantes para comprender un fenómeno. De esta manera, se logra identificar y caracterizar patrones y tendencias en los indicadores de violencia. Para reforzar la confiabilidad y validez de los hallazgos, se empleará la triangulación de datos, contrastando información obtenida de fuentes gubernamentales, académicas y de ONGs. Esta estrategia permitirá obtener una visión integral y objetiva de la situación en Nariño y sus transformaciones tras los Acuerdos de Paz. Además, dicha técnica se unifica con el análisis de datos agregados, el cual implica examinar un conjunto de datos estadísticos para identificar patrones y tendencias. De esta manera, se utilizará el software N.Vivo de análisis cualitativo para organizar y codificar la información de manera sistemática, lo que facilitará la identificación de temas emergentes y relaciones causales entre la implementación de los acuerdos y las dinámicas de violencia. Adicionalmente, se analizarán los datos en función de la reconfiguración de actores armados, las acciones armadas y la persistencia de economías ilícitas, considerando su posible influencia en los indicadores de violencia observados.

Resultados

Transformación del conflicto: control territorial y narcotráfico en Nariño (2010-2016)

El conflicto armado en Nariño ha estado marcado por la lucha por el control de las rutas del narcotráfico, lo que ha intensificado la violencia y transformado la dinámica social. La competencia por estos territorios ha fragmentado el tejido social, atrapando a las comunidades entre grupos armados que buscan imponer su control, generando desconfianza y miedo. Así pues, esta situación ha afectado la cohesión social y la colaboración necesarias para el desarrollo regional. Las condiciones geográficas y socioeconómicas de Nariño, con alta concentración de cultivos de coca, han facilitado esta lucha, convirtiéndolo en un punto estratégico para el narcotráfico (UNODC, 2024). La falta de alternativas económicas y la ausencia del Estado han perpetuado este ciclo de violencia, haciendo que el narcotráfico sea la única opción viable para muchos.

Violencia preacuerdos: homicidios y reclutamiento forzado

El aumento de los homicidios en el departamento de Nariño refleja la intensa disputa por el control del narcotráfico y las secuelas del conflicto armado. En 2014, Nariño presentó una de las tasas de homicidio más altas del país, especialmente en Tumaco, con una tasa de 23,39 por cada 100,000 habitantes (INMLCF, 2015). Este contexto de violencia ha afectado de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, particularmente a niños, niñas y adolescentes, quienes están expuestos al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales. Entre 2014 y 2016, más de 600 menores fueron reclutados por las FARC, lo que constituye una grave violación de derechos humanos (Human Rights Watch, 2016). Este fenómeno plantea la cuestión de cómo la violencia perpetúa un ciclo de desesperanza y vulnerabilidad en las comunidades, dificultando la mitigación de la violencia.

Marginalización y economías ilícitas

La marginalización histórica de las comunidades rurales en Nariño ha sido un factor clave en la perpetuación del conflicto. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2021), en cuanto a Nariño con su contexto migratorio, la medida estadística para evaluar desigualdad de ingresos, o coeficiente de Gini, en el departamento de Nariño

se situó en 0.5. Esto indica un alto nivel de desigualdad, ya que mientras más cercano a 1, mayor es la brecha económica. Además, el 47.6 % de la población del departamento se encontraba en condición de pobreza monetaria, mientras que el 14.2 % enfrentaba pobreza extrema, reflejando las dificultades económicas que afectan a una parte significativa de sus habitantes. En este sentido, la alta pobreza en estas áreas las oportunidades de desarrollo y hace que el cultivo de coca sea una alternativa atractiva para muchas familias. La imposición de un régimen paralelo por parte de las FARC y otros grupos armados refuerza este ciclo de dependencia, donde los campesinos se ven obligados a negociar con actores ilegales para garantizar su supervivencia.

Tensiones étnicas y territoriales

Las tensiones étnicas en Nariño han exacerbado el conflicto, afectando especialmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas comunidades han sido desplazadas de sus territorios tradicionales debido a la presión de los grupos armados (Defensoría del Pueblo, 2016), y la explotación de sus territorios para el cultivo de coca y la minería ilegal ha impactado profundamente sus medios de vida, alterando sus estructuras sociales y culturales. En 2022, el departamento de Nariño concentró el 26 % de los cultivos de coca registrados a nivel nacional, ubicándose como el principal productor del país. Dentro de este porcentaje, el municipio de Tumaco aportó el 35 %, consolidándose como el epicentro de los cultivos ilícitos en la región (SIMCI, 2022). Anteriormente, entre 2010 y 2016, el conflicto en Nariño estuvo marcado por la violencia vinculada al narcotráfico, la marginalización socioeconómica y las tensiones étnicas, factores que siguen influyendo en la situación actual. Los Acuerdos de Paz de La Habana se presentan como una oportunidad para finalizar la violencia y fomentar la reconciliación y el desarrollo sostenible. Sin embargo, las altas tasas de violencia, como los homicidios y el reclutamiento forzado de menores, reflejan el impacto persistente del conflicto, lo que hace necesario evaluar el impacto de los acuerdos en la violencia en Nariño.

Tabla 1.
Homicidios en algunos municipios del departamento de Nariño. (2010-2016)

Municipio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumaco	43.6%	45.5%	46.3%	48.9%	47.2%	50.7%	49.1%
Pasto	15.4%	14.1%	12.2%	12.0%	12.6%	12.7%	12.5%
El Charco	30.8%	32.8%	34.1%	33.3%	31.5%	32.6%	32.1%
Ricaurte	10.3%	11.1%	12.2%	11.6%	11.8%	10.1%	9.4%
La Cruz	5.1%	4.0%	4.4%	4.4%	4.7%	4.0%	3.8%

Nota: Los porcentajes se calcularon sobre el total de homicidios por 100.000 habitantes por año en los cinco municipios listados. Tomado de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2022)

Homicidios

Para proporcionar los datos de homicidios en Nariño entre 2010 y 2018, se recurrió a información oficial proveniente de fuentes confiables como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como reportes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Estas entidades recopilan y consolidan estadísticas anualmente con base en registros forenses, denuncias oficiales y reportes de las autoridades locales, lo que permite obtener una visión general de la situación de violencia homicida en la región. A pesar de que pueden existir ligeras variaciones entre las cifras reportadas por distintas fuentes, en términos generales los datos disponibles muestran patrones consistentes respecto a la evolución de los homicidios. Estas cifras permiten identificar momentos de aumento o disminución de la violencia, los cuales suelen coincidir con contextos sociopolíticos específicos, como la presencia o reconfiguración de grupos armados ilegales, las dinámicas del narcotráfico, o la implementación de políticas de seguridad y paz.

En este sentido, el siguiente cuadro presenta un resumen de los valores estimados de homicidios por año en el departamento de Nariño durante el periodo 2010–2018, proporcionando una base cuantitativa para analizar las tendencias, impactos territoriales y posibles correlaciones con las políticas públicas implementadas durante ese tiempo.

Tabla 2.
Evolución de los homicidios en Nariño (2010-2016)

Año	Tasa de homicidios (por 100.000 hab.)
2010	1,46%
2011	1,54%
2012	1,78%
2013	1,68%
2014	1,61%
2015	1,50%
2016	1,41%

Nota: Cálculos realizados a partir de cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2022)

Entre 2010 y 2012, Nariño experimentó un aumento en los homicidios debido a la intensificación del conflicto armado y la expansión del narcotráfico, alcanzando picos altos en 2012. A partir de 2014, aunque las cifras se mantuvieron elevadas, comenzó a observarse una estabilización en los homicidios, influenciada por los procesos de negociación con las FARC, lo que redujo los enfrentamientos directos entre grupos armados ilegales en algunas zonas. Sin embargo, la violencia estructural persistió, ya que otros grupos, como las disidencias de las FARC y el ELN, continuaron disputando el control de las rutas de narcotráfico y el poder territorial, especialmente en lugares como Tumaco.

Análisis de los homicidios en Nariño (2010-2016)

Entre 2010 y 2016, los homicidios en Nariño fluctuaron, reflejando una violencia persistente y algunos avances en su reducción. En 2010 se registraron 1,462 homicidios, con un leve descenso en 2011 a 1,543. Sin embargo, en 2012, los homicidios aumentaron a 1,782, debido a la reconfiguración de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC y el ELN. En 2013 y 2014, los homicidios se mantuvieron altos, con 1,689 y 1,615, respectivamente. A partir de 2015, se observó una leve disminución, con 1,502 homicidios, y en 2016, bajaron a 1,463, probablemente por el inicio del proceso de paz. Sin embargo, la violencia no se estabilizó, ya que nuevos grupos armados continuaron operando, lo que subraya la necesidad de fortalecer la implementación de los acuerdos de paz y la presencia estatal en las zonas afectadas.

Tabla 3.
Desplazamiento Forzado en Nariño (2010-2016)

Año	Tasa de desplazamiento (por 100.000 hab.)
2010	16%
2011	14%
2012	18,2%
2013	17%
2014	15,5%
2015	16,2%
2016	14,8%

Nota: Datos tomados de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Análisis del Desplazamiento

El desplazamiento en Nariño ha sido constante, con un aumento significativo en 2012 y 2013 debido a las confrontaciones entre actores armados ilegales, el narcotráfico y las disputas territoriales por el control de las rutas del narcotráfico. A pesar de los avances hacia los Acuerdos de Paz en 2016, las cifras de desplazamiento permanecieron elevadas, ya que grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC y el ELN, siguieron operando en la región, especialmente en municipios como Tumaco y Barbacoas. Las políticas implementadas tras la firma de los Acuerdos no lograron una reducción drástica del desplazamiento, lo que refleja las dificultades para contener este fenómeno, a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad y la situación humanitaria en Nariño.

Tabla 4.
Tabla de Datos de Desplazamiento Forzado en Nariño (2010-2016)

Municipio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumaco	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	4.800
Pasto	500	600	700	800	900	1.000	1.200
El Charco	300	350	400	450	500	600	650
Ricaurte	200	220	250	300	350	400	420
La Cruz	100	80	90	100	120	110	100

Nota: Tomado de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV).

Entre 2010 y 2016, el desplazamiento forzado en Nariño mostró una tendencia fluctuante, con picos significativos en ciertos años. Según datos de la UARIV (2012) se registraron

32.073 personas desplazadas, cifra que aumentó a 33.003 en 2013 y alcanzó un máximo de 34.887 en 2014. Posteriormente, en 2015, se observó una disminución a 26.249 desplazados, y en 2016 la cifra se redujo drásticamente a 12.671, coincidiendo con la firma de los Acuerdos de Paz (UARIV, 2017). Este patrón sugiere que, aunque hubo una reducción notable en 2016, los años anteriores estuvieron marcados por altos niveles de desplazamiento, reflejando la intensidad del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales en la región. Asimismo, la concentración del desplazamiento en áreas rurales, donde las comunidades son más vulnerables, destaca la necesidad de respuestas efectivas del gobierno para abordar esta crisis humanitaria. Además, se ha observado una correlación entre el aumento de desplazamientos y los homicidios en la región, especialmente entre 2012 y 2014, lo que subraya la complejidad y gravedad de la situación en Nariño durante ese período. Nariño fue uno de los departamentos con mayor número de desplazados debido a la intensificación del conflicto y la reconfiguración de actores armados. Este fenómeno ha generado un ambiente de inseguridad y desconfianza en las comunidades, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a la estabilidad social de la región.

Tabla 5.

Tabla de Cultivos de Coca en Nariño por Hectáreas (2010-2016)

Municipio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tumaco	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000	12.000	11.500
El Patía	5.000	5.200	5.500	5.800	6.000	6.500	6.200
La Tola	2.500	2.700	2.800	3.000	3.200	3.500	3.600
El Charco	1.000	1.200	1.500	1.600	1.800	2.000	1.900
Ricaurte	150	200	250	300	350	400	420

Nota: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021)

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Nariño

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Nariño es una preocupación creciente, con un aumento de casos de 200 en 2012 a 350 en 2016. Este fenómeno está relacionado con la falta de oportunidades educativas y económicas, lo que hace que los jóvenes sean más vulnerables al reclutamiento por parte de grupos armados. La ausencia de programas de reintegración y protección agrava la situación, creando un ciclo de violencia difícil de romper. Organizaciones como Human Rights Watch (2020) han documentado el uso de menores por parte de grupos armados como estrategia para fortalecer su estructura,

mencionando que estos reclutamientos se originan en las dinámicas propias de las disputas territoriales entre los grupos armados. Además, las condiciones sociales presentes en los entornos afectados, como la pobreza, la falta de oportunidades y la débil presencia institucional, crean un contexto propicio que facilita la incorporación de personas, especialmente jóvenes, a estos grupos ilegales. Este reclutamiento no solo perpetúa la violencia, sino que también afecta negativamente el desarrollo social y educativo de las víctimas.

Tabla 6.
Acciones Armadas en Nariño (2010 – 2018)

Año	Registro de acciones armadas reportadas
2010	2.500
2011	2.750
2012	3.000
2013	2.800
2014	3.200
2015	2.950
2016	2.600
2017	2.800
2018	2.023

Nota: tomado de Informes INDEPAZ

Estas cifras son aproximadas y pueden variar dependiendo de las fuentes. Además, los municipios más afectados fueron Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, donde las acciones armadas, como masacres y enfrentamientos con grupos ilegales, tuvieron un impacto directo en la población civil. El contexto de estos eventos está relacionado con la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y otras bandas criminales. Además, el informe de INDEPAZ y la JEP menciona el continuo aumento de la violencia en áreas clave hasta 2018, aunque a partir de 2022 hay signos de reducción

Análisis de los Datos

Entre 2012 y 2014, Nariño vivió un pico de violencia con 3,000 a 3,200 incidentes armados, debido a la fuerte presencia de las FARC y otros grupos ilegales. A partir de 2015, los incidentes comenzaron a disminuir, alcanzando 2,950 en 2015 y 2,600 en 2016, gracias a las negociaciones de paz, aunque la violencia no desapareció por completo debido

a la reconfiguración de las FARC y la presencia del ELN. Entre 2017 y 2018, la violencia continuó disminuyendo, pero persistió en municipios como Tumaco y Barbacoas, afectados por disidencias y el ELN. A pesar de una leve disminución en 2018 y 2023, la violencia sigue siendo una preocupación, especialmente en áreas rurales. Los indicadores de violencia, como homicidios, desplazamientos y reclutamiento de menores evidencian la relación entre estos problemas y subrayan la necesidad de políticas que vayan más allá de la intervención militar, priorizando el desarrollo social, la protección de derechos humanos y un enfoque integral para romper el ciclo de violencia y fomentar la paz en la región.

Implementación de los Acuerdos de Paz en Nariño (2018-2025)

La implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, firmados en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, marcó un hito en la historia del conflicto armado colombiano. Sin embargo, la aplicación de los acuerdos ha enfrentado múltiples desafíos, especialmente en regiones como Nariño, donde la presencia de actores armados y el narcotráfico han obstaculizado el proceso de paz. Entre 2018 y 2023, Nariño se destacó por ser uno de los departamentos con mayor actividad armada, debido a la reconfiguración de actores ilegales y al débil control del Estado en zonas estratégicas para el tráfico de drogas. En esta parte, se examinarán las políticas implementadas en Nariño durante este periodo, los principales desafíos que enfrentó el proceso y el impacto real de dichas políticas sobre indicadores clave de violencia como homicidios, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y acciones armadas.

Políticas de implementación de los Acuerdos de Paz

El proceso de implementación de los Acuerdos en Nariño incluyó la creación de Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para excombatientes, como en los municipios de Policarpa y Tumaco. En estos espacios, se diseñaron programas enfocados en la reincorporación económica y social de los exguerrilleros, así como proyectos productivos agrícolas. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en 2020 se reportaron más de 600 excombatientes en Nariño que participaban en estos proyectos, muchos de ellos orientados a cultivos de cacao y café. Además, se implementaron planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que pretendían mejorar

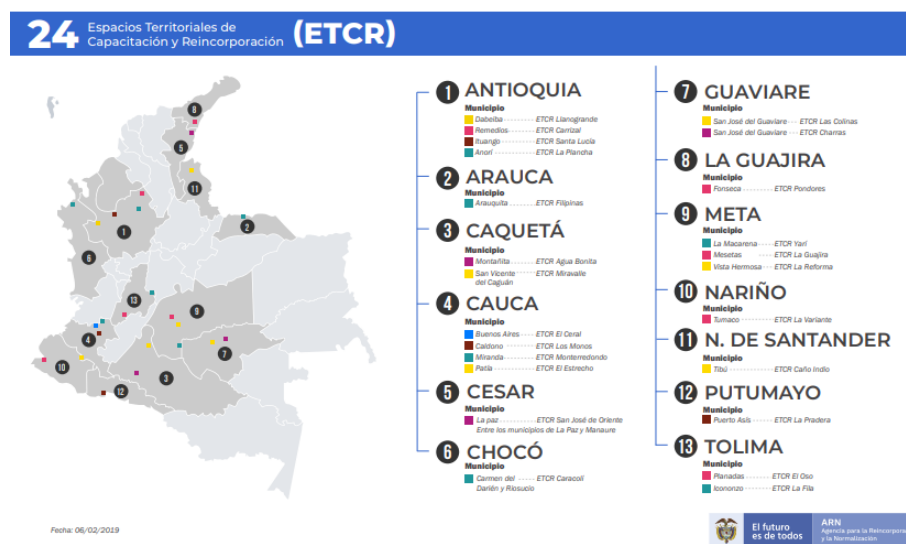
la infraestructura y los servicios básicos en municipios históricamente afectados por el conflicto. A pesar de estas iniciativas, los avances han sido desiguales. Informes de la Procuraduría General de la Nación (2022) señalaron que la ejecución de los PDET en Nariño apenas alcanzó un 30 %, evidenciando problemas de financiación y coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales.

La creación de espacios territoriales para la reintegración de excombatientes.

Tras el cierre de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización en agosto de 2017, se establecieron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), gestionados por la ARN. Estos espacios facilitan la reintegración de excombatientes de las FARC-EP a la vida civil mediante formación y apoyo institucional, beneficiando también a las comunidades cercanas. Aunque los excombatientes tienen derecho a la libre movilidad y no están obligados a permanecer en los ETCR, estos siguen funcionando como un vínculo con la oferta estatal y local

Figura 1.

Distribución de los ETCR en Colombia



Nota: Tomado de la ARN (2019)

El ETCR de Tumaco, La Variante, en Nariño, ocupa 368 hectáreas y alberga a 73 personas acreditadas (ARN, 2019). Para 2022, se implementaron proyectos de vivienda impulsados por Naciones Unidas y el Ministerio de Agricultura, aunque persistían deficiencias en

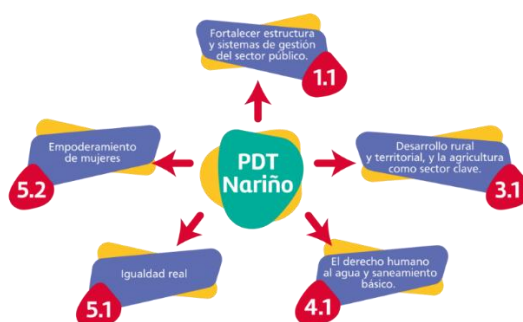
servicios públicos (ARN, 2022). A pesar de estas limitaciones, se desarrollaron proyectos productivos en agricultura, piscicultura, ganadería y artesanías, contribuyendo al desarrollo social y la paz (ARN, 2022). Además, se han promovido medidas políticas, como la participación de excombatientes en el Congreso y la creación de espacios para su reinserción a través de proyectos productivos (Obando, 2022). Estos procesos consideran un enfoque diferencial y étnico, dado que muchos excombatientes provienen de comunidades indígenas y afrodescendientes. Asimismo, menciona Obando (2022) que se ha integrado también un enfoque de género, reconociendo el papel de las mujeres. El modelo educativo en el ETCR, con enfoque etnoeducativo, busca garantizar los derechos de los miembros, fortalecer su identidad cultural y promover la cohesión social. Además, se implementan acciones para garantizar la sostenibilidad ambiental, fomentar la participación ciudadana y fortalecer el papel de las autoridades locales.

Programas específicos de desarrollo territorial.

Los Programas Específicos de Desarrollo Territorial promueven un crecimiento sostenible y equitativo, considerando las particularidades de cada región. En Nariño, el Proyecto de Desarrollo Territorial en condiciones de Paz (PDT NARIÑO) ha implementado una estrategia multisectorial para generar oportunidades productivas y económicas con enfoque en sostenibilidad. Este proyecto integra derechos, género, identidad étnica, resiliencia y planificación territorial, alineando sus acciones con los planes de desarrollo locales y las agendas de paz. Su objetivo es fortalecer el tejido social y fomentar un desarrollo inclusivo en municipios clave como Pasto, Tumaco e Ipiales, contribuyendo a la transformación territorial y a la consolidación de la paz. En la siguiente figura se muestra cómo está articulado el PDT NARIÑO con las Líneas de Acción priorizadas en el Marco de Asociación País España - Colombia MAP 2015 – 2019.

Figura 2.

Articulación del PDT NARIÑO con las Líneas de Acción



Nota: tomado de PDT Nariño (s.f)

El proyecto impulsa el desarrollo territorial en Nariño fortaleciendo autoridades locales en áreas clave como gestión, planificación y recaudación, promoviendo la participación ciudadana de productores, mujeres y víctimas del conflicto (PDT Nariño, s.f.). La Gobernación de Nariño implementa el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 para transformar territorios y fortalecer el tejido social como base para la paz territorial. Este enfoque integral promueve los derechos humanos, la inclusión y la erradicación de la pobreza, fomentando la justicia ambiental y el uso sostenible de recursos (PDT Nariño, s.f.).

La construcción de paz busca crear condiciones para el ejercicio pleno de derechos, reducir la violencia armada y garantizar la reparación a las víctimas. Se coordina la reducción de la pobreza y las desigualdades, promoviendo oportunidades en regiones marginadas. El enfoque de género asegura la participación de mujeres y la comunidad LGTBIQ+ en la toma de decisiones. Además, el enfoque poblacional diferencial atiende a grupos específicos como niños, personas con discapacidad y adultos mayores. La gobernanza multinivel articula recursos entre diferentes niveles de gobierno para implementar proyectos con impacto territorial y fortalecer la gestión pública (PDT Nariño, s.f.).

En cuanto a la construcción del Plan de Desarrollo, se alinean los esfuerzos locales con las metas globales de sostenibilidad y erradicación de la pobreza, tomando como referentes los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el

Plan de Paz y el programa "Un Pacto por Nariño" del gobernador Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Segundo, se lleva a cabo un proceso de diálogo ciudadano llamado *JUNTANZAS*, con el fin de fortalecer la participación de la comunidad en la identificación y priorización de necesidades en tres niveles: subregional, temático y poblacional. Además, se organiza una mesa de trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores, organizaciones sociales y la Dirección Regional del Trabajo. En la Tabla 7 permite discriminar los escenarios, objetivos y cantidad de juntanzas que se han llevado a cabo.

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Nariño 2024-2027 se basa en una colaboración estrecha entre actores territoriales y el gobierno, utilizando mesas técnicas para definir metas y estrategias, y tomando en cuenta las recomendaciones de Corponariño y el Consejo Territorial de Planeación (PDT Nariño, s.f.). Se enfoca en dos áreas clave: el Pacto Territorial para la Vida y la Paz, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y los diálogos sociales en el marco de la Ley de la Paz Total. Este plan promueve la transformación sostenible del territorio y la construcción de paz, con un enfoque en el goce efectivo de derechos. Se incorporan cuatro tipos de indicadores para medir el impacto: trazadores, de equidad, de resultados y de producto. Estos indicadores permiten evaluar los esfuerzos institucionales, la equidad en las políticas públicas, los efectos de las intervenciones y la provisión de bienes y servicios esenciales para lograr los objetivos del plan (PDT Nariño, s.f.).

Iniciativas de seguridad y protección

La Gobernación de Nariño, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, ha firmado el Plan Integral de Prevención y Protección (PIP), una estrategia clave para identificar riesgos y vulnerabilidades en poblaciones de especial protección constitucional. Este plan implementa acciones para prevenir y mitigar amenazas, analizar dinámicas del conflicto y responder a las alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT). El PIP establece protocolos de actuación con enfoque diferencial para salvaguardar la vida de defensores de derechos humanos y líderes sociales, fortaleciendo la articulación entre los gobiernos nacional, departamental y municipal. Seguidamente, en 2023, ONU Mujeres, con apoyo del Fondo Multidonante para la Paz y CODHES, lideró el proyecto "Participación, diálogo e incidencia de mujeres y niñas víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en la

subregión del Telembí, Nariño", el cual impulsó la participación de mujeres, niñas y lideresas sociales en la identificación y mitigación de riesgos, especialmente en los municipios más afectados por el conflicto armado. Este proceso pionero en el país incorporó la Ley de Cuidado con un enfoque diferencial, reconociendo la diversidad étnica y estableciendo rutas de atención ante situaciones de riesgo.

Análisis de los datos.

El proceso de implementación de los Acuerdos de Paz en Nariño ha avanzado, pero enfrenta retos significativos en ejecución y alcance. Se crearon Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en municipios como Policarpa y Tumaco, con más de 600 excombatientes participando en proyectos productivos, pero la infraestructura y servicios básicos en estos espacios siguen siendo insuficientes. Los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han tenido avances limitados, alcanzando solo un 30 % en Nariño debido a problemas de financiamiento y falta de coordinación. Se promovió la participación de excombatientes en el Congreso y en espacios productivos con enfoque de género y étnico, y se han desarrollado programas etnoeducativos para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. Cabe destacar que, en 2023, ONU Mujeres lideró un proyecto en la subregión del Telembí para fortalecer la participación de mujeres y niñas desplazadas, pero la presencia de grupos armados sigue siendo una amenaza. Para evaluar el Plan de Desarrollo 2024-2027, se establecieron indicadores de inversión, equidad, resultados y productos. Aunque ha habido avances, las barreras estructurales y la violencia continúan obstaculizando la consolidación de la paz en Nariño.

Tabla 7.
Escenarios y juntanzas llevadas a cabo

Escenario	Participantes	Objetivo	Cantidad de juntanzas	Número de Participantes
Subregional	Comunidad en general y autoridades locales	Conocer la problemática e identificar las propuestas que desde la ciudadanía emergen, a través de un ejercicio amplio y participativo en el cual las comunidades de las 13 subregiones del Departamento expusieron sus visiones, aspiraciones e iniciativas y, al mismo tiempo, contribuyeron en el diseño de una hoja de ruta para su concreción	13	11.104
Poblacionales	Comunidades de los 7 pueblos indígenas, afrodescendientes, pueblo Rom, organizaciones campesinas, juntas de acción comunal, víctimas del conflicto y reincorporados, mujeres, LGTBIQ++, jóvenes, población en discapacidad, en habitanza en calle, asuntos religiosos	Identifica a través de un diálogo intercultural alrededor de las agendas políticas y sociales de los diferentes grupos poblacionales que integran las bases de la organización social en Nariño en aras de concretar una serie de apuestas y compromisos que permitan contribuir en el cierre de brechas y la garantía del goce efectivo de derechos de sus poblaciones y el departamento.	16	1.406
Temáticas	Comunidad en general y personal vinculado a los diferentes sectores de salud, educación, cultura, gestión del riesgo, deporte, infraestructura, servicios públicos, seguridad y convivencia, derechos humanos, bienestar animal, agricultura y desarrollo rural, ambiente y desarrollo sostenible, TICs, turismo e inclusión social.	Identificar las propuestas de las organizaciones y representantes de cada uno de los sectores que integran el gobierno departamental para avanzar en la definición de metas e indicadores de resultados, y determinar de qué manera pueden contribuir al diseño de estrategias que mejoren las acciones a implementar en distintos sectores.	15	1.565
Mesas de trabajo	Directivas de la Central Unitaria de Trabajadores, personal vinculado a organizaciones sociales y Dirección Regional del Trabajo.	Incluir las demandas de los trabajadores en la definición estrategias, programas y metas del plan de desarrollo para fortalecer el sector productivo y laboral del departamento	1	30
Interacción a través de plataformas digitales y redes sociales	Comunidad en general	Identificar las demandas y propuestas de la ciudadanía a través de las plataformas digitales y redes sociales de la gobernación	45	Alcance: 185.176 Interacciones: 7.457

Nota: Tomado de la Gobernación de Nariño (2023).

Tabla 8.

Indicadores trazadores del Plan de Desarrollo Nariño Región país para el mundo 2024 - 2027

Transformación	Indicador	Línea Base	Meta	ODS
Derechos Humanos, cultura de paz y alianzas para la vida.	Tasa de homicidios por 100.000 habitantes	33,68 (2023)	31	ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
	Víctimas que han superado su condición de vulnerabilidad	27,53 % (2022)	28,50 %	ODS 1. Fin de la Pobreza ODS 5. Igualdad de género ODS 10. Reducción de las desigualdades
	Hectáreas con cultivos de coca	59.746 (2022)	30.000	ODS 1. Fin de la pobreza. ODS 2. Hambre cero. ODS 5. Igualdad de género. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas ODS 17. Alianzas para lograr objetivos
	Familias con iniciativas productivas que garanticen la transición hacia cultivos legales	200 (2023)	750	ODS 1. Fin de la pobreza. ODS 2. Hambre cero. ODS 5. Igualdad de género. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas ODS 17. Alianzas para lograr objetivos
	Predios formalizados.	78 (2022)	70 pequeños productores 8 títulos colectivos.	ODS 1. Fin de la pobreza. ODS 2. Hambre cero. ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. ODS 10. Reducción de las desigualdades. ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.

Nota: tomado de la Gobernación de Nariño (2023).

Desafíos en la Implementación

El principal obstáculo para la consolidación de la paz en Nariño ha sido el resurgimiento de las disidencias de las FARC y la presencia de otros actores armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos narcotraficantes. Tras la desmovilización de las FARC, surgieron estructuras disidentes como "Los Contadores" y "Guerrillas Unidas del Pacífico", que han disputado el control de corredores estratégicos para el tráfico de cocaína. Tumaco se consolidó como uno de los principales municipios de cultivo de coca en Colombia, con aproximadamente 19.374 hectáreas sembradas en 2021 (Informe de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, UNODC, 2022).

La violencia contra líderes sociales también se intensificó, registrándose 87 asesinatos entre 2018 y 2023, especialmente en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, lo que refleja la fragilidad de la implementación de los Acuerdos y la falta de seguridad para las comunidades rurales (Indepaz, 2023). Según el Análisis de Protección del Departamento de Nariño de ONU Mujeres (2022), Nariño es una región disputada por actores armados ilegales debido a los cultivos ilícitos y las rutas de tráfico, lo que ha generado enfrentamientos constantes y graves repercusiones para la población local. Las subregiones más afectadas son el Pacífico Sur, Sanquianga, Telembí, Piedemonte Costero y la Cordillera, que albergan principalmente comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, además de población migrante y refugiada. Asimismo, en 2021, se registraron nueve masacres y el asesinato de diez líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, siendo Tumaco el municipio más afectado, con más del 50 % de la población afrocolombiana (ONU Mujeres, 2022). Los principales desafíos para la implementación de los Acuerdos incluyen el resurgimiento de las disidencias de las FARC, el fortalecimiento de grupos narcotraficantes y actores armados, los asesinatos de líderes sociales y la falta de presencia estatal.

Resurgimiento de disidencias de las FARC.

En Colombia, los acuerdos de paz no han logrado garantizar una construcción sostenible de la paz ni abordar los problemas estructurales que han alimentado más de seis décadas de conflicto armado (Lasso-Urbano y Cabello-Tijerina, 2024). Los incumplimientos constantes de pactos entre el Estado y los grupos guerrilleros reflejan esta situación. Nariño ha sido particularmente afectado por la concentración de tierras, la exclusión social y política, y una democracia favorecida por las élites, lo que perpetúa altos niveles de pobreza y desigualdad. Estas élites, involucradas en actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, han fortalecido su poder, alimentando la persistencia del conflicto. Por lo tanto, el resurgimiento de las disidencias de las FARC en la región responde a estos factores estructurales no resueltos. La falta de implementación efectiva del Acuerdo de Paz, especialmente en la reforma rural integral y la seguridad de los excombatientes, ha llevado a muchos a retomar las armas o participar en economías ilícitas. La disputa por el control de estas economías ilegales ha intensificado la violencia, afectando gravemente a

comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas (Lasso-Urbano y Cabello-Tijerina, 2024).

Datos sobre el impacto de la implementación

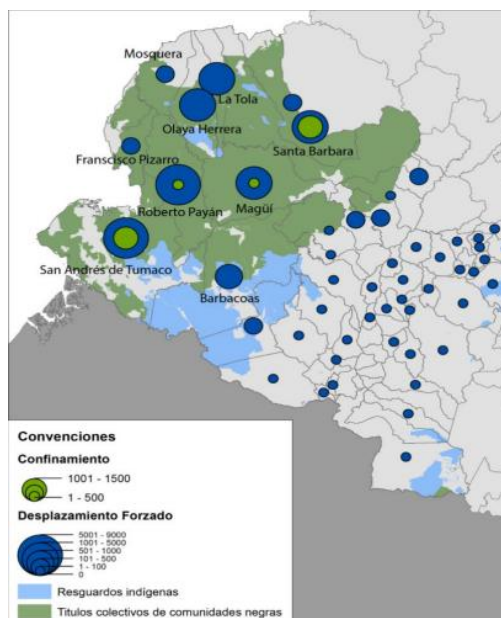
A continuación, se presentan algunos indicadores clave que muestran la evolución de la violencia en Nariño desde la implementación de los Acuerdos de Paz

Indicadores de homicidios, desplazamiento, reclutamiento de NNA, y acciones armadas.

En 2021, Nariño registró al menos 31.816 víctimas de desplazamiento forzado, en su mayoría afrocolombianos (75 %) e indígenas (8 %), con un alto impacto en mujeres (51 %) y niños (38 %) (UARIV). Ese mismo año, se reportaron 3.048 personas afectadas por confinamiento, 3.085 amenazadas, 20 incidentes con minas, 7 menores reclutados y 77 delitos sexuales, siendo las mujeres las principales víctimas. Los grupos armados ilegales ejercieron presión sobre la población civil mediante estrategias como la distribución de carnés, restricciones de movilidad y coerción para evitar la presencia de la fuerza pública. Sin embargo, estas cifras son subestimadas debido al miedo, amenazas y barreras económicas que dificultan la denuncia. Además, las personas extranjeras enfrentan obstáculos adicionales para acceder a protección. La capacidad institucional para responder es insuficiente, con funcionarios amenazados y dificultades para activar rutas de protección, especialmente en casos de violencia de género, lo que contribuye a la invisibilización de las violaciones de derechos humanos.

Figura 3.

Clúster Protección Colombia. Registro Único de Víctimas - UARIV



Nota: tomado de ONU Mujeres (2023)

La población refugiada y migrante en Nariño enfrenta múltiples dificultades, incluyendo la falta de claridad en los procedimientos estatales para proteger sus derechos de manera integral (ONU Mujeres, 2022). Estas personas enfrentan barreras para acceder a la ayuda humanitaria y denunciar hechos victimizantes, lo que dificulta su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV). Además, el temor a la deportación debido a su estatus migratorio irregular agrava su situación. La falta de acceso a servicios de salud, justicia y una mayor exposición a redes de trata de personas, especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, también son problemas importantes. Asimismo, en 2021, se registraron 346 homicidios en Nariño, y un porcentaje significativo de las víctimas pertenecía a grupos étnicos (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2022). Los grupos armados ilegales utilizan diversas estrategias para el reclutamiento, explotación y control de NNA, incluso durante la emergencia por COVID-19, cuando la falta de servicios y la desprotección social favorecieron la captación de estos jóvenes, incluidos los migrantes (ONU Mujeres, 2022).

Evaluación de las políticas frente a estos indicadores

La implementación de las políticas derivadas de los Acuerdos de Paz en Nariño enfrenta desafíos significativos que limitan su efectividad, como la persistencia de la violencia de grupos armados ilegales y la escasa presencia del Estado en algunas áreas. En 2021, más de 31,000 personas fueron desplazadas, principalmente afrocolombianos e indígenas, reflejando la continua violencia en el territorio. El subregistro de los hechos es otro obstáculo, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o falta de acceso a instituciones. La población migrante enfrenta barreras adicionales, como la desconfianza en las autoridades y el temor a la deportación. Las mujeres, niñas y adolescentes son las principales víctimas de violencia sexual y reclutamiento forzado. La emergencia por COVID-19 empeoró las condiciones de vulnerabilidad, facilitando el reclutamiento forzado. Igualmente, la débil presencia estatal y la limitada capacidad institucional dificultan la protección y acceso a servicios esenciales. Las políticas de paz deben adaptarse a la realidad local, fortalecer la presencia del Estado, garantizar la seguridad de los funcionarios y facilitar el acceso a la justicia para todas las víctimas, independientemente de su estatus migratorio o etnia.

Discusión de los hallazgos

La evidencia sugiere que, aunque los Acuerdos de Paz representaron una oportunidad para la desmovilización de los actores armados y la reducción de la violencia en Nariño, su impacto ha sido parcial y desigual. Antes de la firma de los acuerdos, la región estaba marcada por un conflicto prolongado con la presencia de las FARC-EP, el ELN y grupos criminales, facilitados por su geografía y su vinculación a rutas estratégicas del narcotráfico. Tras la implementación de los acuerdos, aunque hubo una desmovilización parcial de las FARC-EP, la violencia no disminuyó homogéneamente, ya que surgieron disidencias y otros grupos armados, como el ELN, manteniendo la situación de inseguridad. Además, la continuidad de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, sumada a la falta de control estatal efectivo y alternativas económicas, contribuyó a la persistencia del conflicto, lo que explica la desigual efectividad de los Acuerdos en la reducción de la violencia.

Por otro lado, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como el de "La Variante" en Tumaco, representan un esfuerzo concreto para la reincorporación

de excombatientes. Con 368 hectáreas y capacidad para 73 personas acreditadas, este espacio ha sido fundamental para la transición de excombatientes a la vida civil. El enfoque diferencial resalta la diversidad étnica dentro del ETCR, donde muchos miembros provienen de resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes.

En cuanto a los programas de desarrollo territorial, el Proyecto de Desarrollo Territorial en condiciones de Paz (PDT NARIÑO) ha implementado una estrategia multisectorial en municipios clave como Pasto, Tumaco e Ipiales, con enfoques de derechos, género, identidad étnica y resiliencia. Asimismo, el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 establece una hoja de ruta para la transformación sostenible de los territorios nariñenses, incorporando enfoques de Derechos Humanos, Desarrollo Humano Sostenible, Construcción de Paz, Territorial, Género, Poblacional diferencial y Gobernanza multinivel. Sin embargo, la implementación ha enfrentado desafíos. La ejecución de los PDET en Nariño ha sido limitada, alcanzando solo un 30 % en 2022, debido a problemas de financiación y coordinación intergubernamental.

El Plan Integral de Prevención y Protección (PIP) de la Gobernación de Nariño busca identificar riesgos y vulnerabilidades en poblaciones en especial protección constitucional, destacando un proyecto de participación de mujeres y niñas liderado por ONU Mujeres en 2023. Sin embargo, el resurgimiento de disidencias de las FARC, el ELN y grupos narcotraficantes sigue siendo el principal obstáculo para la paz en la región. Los factores estructurales como la concentración de tierras, la exclusión social y la persistencia de economías ilícitas no han sido adecuadamente abordados en los Acuerdos de Paz.

Los indicadores de violencia, como los 346 homicidios registrados en 2021, muestran una concentración en municipios como Tumaco, Pasto e Ipiales, afectando principalmente a personas de 15 a 49 años, con un 16 % de víctimas de grupos étnicos. También se reportaron 174 casos de desaparición forzada, con un impacto en mujeres y adolescentes. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes persiste, utilizando métodos como ofertas económicas y amenazas, mientras que la capacidad institucional para enfrentar estos problemas sigue siendo insuficiente. En este sentido, la persistencia de estos indicadores de violencia, a pesar de los Acuerdos de Paz, evidencia que las políticas implementadas no han logrado transformar efectivamente las condiciones estructurales que alimentan el conflicto

en Nariño. La continuidad de grupos armados ilegales, el control territorial que ejercen, y la persistencia de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, demuestran que la paz no se ha consolidado en el territorio. La situación se agrava por la débil presencia estatal, la limitada capacidad institucional y las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a la justicia y a mecanismos de protección.

La implementación de los Acuerdos de Paz en Nariño, aunque ha generado espacios importantes para la reincorporación y el desarrollo territorial, enfrenta desafíos estructurales que requieren una atención prioritaria. El fortalecimiento de la presencia estatal, la garantía de seguridad para líderes sociales y excombatientes, la transformación de economías ilícitas, y la adaptación de las políticas a las necesidades específicas de comunidades étnicas y poblaciones vulnerables, son elementos cruciales para avanzar hacia una paz sostenible en el departamento. Sin abordar estas condiciones estructurales, los indicadores de violencia continuarán reflejando una implementación insuficiente de los Acuerdos y una paz que, para muchas comunidades nariñenses, sigue siendo una promesa incumplida.

Conclusiones

La implementación de los Acuerdos de Paz en Nariño ha sido parcial y enfrenta limitaciones estructurales profundas que han dificultado la consolidación de una paz sostenible en el territorio. A pesar de los avances logrados con iniciativas como los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que han facilitado la reintegración de excombatientes, el Proyecto de Desarrollo Territorial en condiciones de Paz (PDT Nariño), y el Plan de Desarrollo Departamental, que incorpora enfoques de derechos, género, territorialidad y sostenibilidad, los impactos de estas políticas han sido desiguales y limitados por factores persistentes. Entre las principales problemáticas se encuentran los altos niveles de violencia, reflejados en cifras alarmantes de homicidios, desapariciones forzadas y amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El desplazamiento forzado continúa afectando a comunidades rurales, en su mayoría afrocolombianas e indígenas, debido a la presencia activa de grupos armados ilegales y a la disputa por territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. De igual manera, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una práctica

recurrente, especialmente en zonas con baja presencia estatal y escasas oportunidades educativas y laborales.

La persistencia de economías ilícitas, como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, alimenta los ciclos de violencia y dificulta el tránsito hacia una economía legal y sostenible. Además, la débil capacidad institucional y las fallas en la coordinación intergubernamental han limitado el alcance y la efectividad de los programas previstos en los Acuerdos, generando desconfianza en la población y debilitando la legitimidad del Estado. En este sentido, la débil presencia del Estado, la limitada capacidad institucional y la falta de adaptación de las políticas a las realidades locales, especialmente en contextos étnicos y rurales, han reducido considerablemente la efectividad de las medidas adoptadas. Esta ausencia de un Estado fuerte y articulado en el territorio ha dejado vacíos de poder que han sido ocupados por grupos armados ilegales, quienes imponen sus propias reglas y controlan las dinámicas sociales, económicas y de seguridad en muchas comunidades.

La persistencia de grupos armados ilegales y el control territorial que ejercen en varias zonas del departamento de Nariño ponen en evidencia que los factores estructurales del conflicto —como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas, la exclusión histórica de comunidades rurales y étnicas, así como la débil presencia del Estado— no han sido transformados de manera efectiva. Estas condiciones han permitido que actores armados ilegales mantengan su influencia, recluten a jóvenes, ejerzan control sobre la población y perpetúen ciclos de violencia, desplazamiento forzado y economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.

Para lograr una paz verdadera y duradera en el departamento, es imprescindible una acción decidida y articulada del Estado que no se limite a intervenciones coyunturales o militares. Se requiere, ante todo, fortalecer las condiciones de seguridad con enfoque preventivo y comunitario; ampliar el acceso a una justicia eficaz, culturalmente pertinente y accesible; garantizar la protección de las comunidades más vulnerables, en especial mujeres, niños, pueblos indígenas y afrodescendientes; y avanzar con firmeza en la transformación de las economías ilegales a través de alternativas sostenibles que generen ingresos dignos y legítimos para la población. Este proceso no puede lograrse sin el compromiso genuino de

las instituciones, la participación de las comunidades y el reconocimiento de sus voces como protagonistas de la paz.

Referencias Bibliográficas

Fuentes de libros o monografías

Ávila, A. (2019). *La paz fragmentada: Los desafíos de la violencia en las regiones periféricas de Colombia*. Editorial Planeta.

Gutiérrez Sanín, F., & González, C. (2017). *Los Acuerdos de Paz en Colombia: Evaluación de su impacto en la reducción del conflicto armado*. Universidad Nacional de Colombia.

Reyes, W. (2021). *Desmovilización y violencia residual en Colombia: Un análisis comparativo de las regiones más afectadas por el conflicto armado*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Artículos académicos

Calderón Rojas, Jonathan. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, (62), 227-257. Recuperado en 03 de abril de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742016000100227&lng=es&tlng=es.

Escudero, C., (2020). Thematic Analysis as a research tool in the area of Social Communication: contributions and limitations. *La Trama de la Comunicación*, 24(2), 89-100.

Lasso Urbano, C., & Cabello Tijerina, P. A. (2024). Élite y conflicto sociopolítico y armado en Nariño y Colombia: un análisis en torno a su papel obstaculizador como clase dominante en la construcción de la paz real. *El Ágora USB*, 24(2), 432–455. <https://doi.org/10.21500/16578031.7057>

Vargas, J. C. (2020). Los nuevos retos de la violencia en Nariño: actores armados y narcotráfico después de los Acuerdos de Paz. *Universidad de los Andes*.

Informes institucionales o gubernamentales

Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, s. f.). Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Banco Nacional (2024). *Nariño 2024. Una mirada actual al contexto migratorio y sus determinantes sociales.*

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2021). *La guerra no termina: Informe sobre la persistencia del conflicto armado en Colombia después de los Acuerdos de Paz.* CNMH.

Gobernación de Nariño (s.f.). *En Nariño se firmó el Plan Integral de Prevención y Protección para la protección de líderes y lideresas que trabajan por la paz.*

Gobernación de Nariño (2023). *Nariño, región país para el mundo. Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.*

Human Rights Watch. (2020). *Reclutamiento forzado de menores en Colombia: Informe 2019.* HRW.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2015) *Forensis: Datos para la Vida.*

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2022). *Informe de violencia homicida en Colombia: Análisis de los indicadores regionales.* INMLCF.

ONU Mujeres (2023). *Análisis de Protección. Departamento de Nariño. República de Colombia.*

Observatorio de Violencia de Nariño. (2023). *Informe de homicidios en Nariño.*

Observatorio de Violencia de la Universidad del Rosario (2017).

PDT NARIÑO (s. f.). *Articulación del Proyecto.*

PDT NARIÑO (s. f.). *¿Quiénes somos?*

Procuraduría General de la Nación (2022) *Informe sobre el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes*.

UNODC. (2024). *Informe mundial sobre las drogas 2024*. Publicación de las Naciones Unidas.

UNODC (2021). *Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Informe sobre cultivos de coca en Colombia*.

UARIV (2022). *Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Reporte de desplazamiento forzado en Nariño*.

ACNUR. (2021). *Desplazamiento forzado en Colombia: Informe anual 2020*. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Tesis o trabajos de investigación

Obando, R. (2022). *El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Variante, Tumaco (Nariño). Un estudio de caso sobre los avances, obstáculos y retos existentes en la implementación de los componentes de educación y sostenibilidad económica del 2020 al 2022*. Pontifica Universidad Javeriana.

Salcedo-Albarán, A., & Garzón-Vergara, J. C. (2019). *Reconfiguración de las economías ilegales: El impacto de la desmovilización de las FARC en el reclutamiento de menores*. Fundación Ideas para la Paz.